

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Comisión de Peticiones

14 de febrero de 2005

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 209/2003, presentada por Kartar Badsha, de nacionalidad británica, sobre un incumplimiento de las Directivas 84/450/CEE y 93/13/CEE

1. Resumen de la petición

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de mayo de 2004. Se pidió a la Comisión que facilitara información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de febrero de 2005

“El peticionario denuncia la corrupción, la inaccesibilidad y la falta de imparcialidad e independencia del poder judicial en el Reino Unido. Asimismo, subraya que no existe un mecanismo que asegure una posibilidad de reparación cuando el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) viola el Convenio. Alega que no existen garantías de obtener una vista imparcial y una reparación efectiva a través del TEDH.

El peticionario añade que falta una legislación comunitaria pertinente que proteja a los ciudadanos de la Unión y que se otorga una mayor protección de los derechos humanos a los nacionales de terceros países y de países en desarrollo que a los ciudadanos de los propios Estados miembros. Alude asimismo al debate relativo a la adhesión de la UE al Convenio.

El peticionario se queja asimismo de las presuntas infracciones de la Directiva 84/450/CEE de 10 de septiembre de 1984 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa, la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta a los datos personales y a la libre circulación de éstos.

En lo que atañe a las quejas antes mencionadas en relación con el poder judicial en el Reino Unido, la Comisión subraya que carece de competencia general en lo que se refiere a derechos fundamentales de conformidad con lo dispuesto en los Tratados de la Unión Europea y por el que se establece la Comunidad Europea. Sólo puede intervenir en el caso de violaciones de derechos fundamentales en el campo de la aplicación de la legislación comunitaria. Las reclamaciones del peticionario aluden al funcionamiento del poder judicial nacional, materia no regida por la legislación comunitaria.

En cualquier caso, por lo que atañe a la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta a los datos personales, la Comisión desea destacar que llevó a cabo un análisis pormenorizado de la legislación del Reino Unido de ejecución de tal Directiva. Puesto que se detectaron varias deficiencias en la transposición de dicho instrumento, la Comisión decidió el 7 de julio de 2004 incoar un procedimiento de infracción contra el Reino Unido.

Por lo que se refiere a las quejas del peticionario relativas a la falta de un mecanismo pertinente que garantice una posibilidad de reparación cuando el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos viola el Convenio, la Comisión hace hincapié en que esta cuestión queda fuera del alcance de su competencia, ya que ésta sólo cubre el ámbito de la aplicación de la legislación comunitaria.

En cuanto a la adhesión de la UE al Convenio, debe mencionarse que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa convenido el 17 y 18 de junio (CIG 81/04 Anexo 47) contempla la posibilidad de que la Unión Europea se adhiera al TEDH. Conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo I-7 del Tratado: “La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en la Constitución”. Con la coexistencia de la Carta de los Derechos Fundamentales y del Convenio Europeo de Derechos Humanos se pretende potenciar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión. La incorporación de la Carta a los Tratados y la adhesión de la Unión al TEDH deben percibirse como pasos complementarios para garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el seno de la UE.”